

**Reporte *Indigenous Surveillance*, capítulo Chile**  
**Televigilancia: cámaras de seguridad en las**  
**comunidades mapuche**

Autoría:	Este reporte fue hecho para el proyecto <i>Indigenous Surveillance</i> por la investigadora Paz Peña.
Fecha y lugar de última versión:	04 de agosto del 2019 / <a href="http://www.indigenoussurveillance.net">www.indigenoussurveillance.net</a>
Versión:	1.0
Derecho de autor:	Esta obra está bajo el Dominio Público, por lo que puedes usarlo y reutilizarlos libremente, reconociendo la autoría de la investigadora y del proyecto <i>Indigenous Surveillance</i> .

**E**l 1 de agosto del 2011, una cámara de seguridad y vigilancia de largo alcance [fue comprada](#) por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, e instalada en el fundo La Romana, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. La cámara era monitoreada y operada por Fuerzas Especiales de la prefectura de Malleco, a través de una minicentral ubicada en una garita en lo alto del fundo. ¿La razón de su adquisición? [Según La Tercera](#), para "lograr la identificación de los activistas que causan incidentes en la denominada zona del conflicto mapuche".

En ese entonces, el fundo La Romana -del que era dueño René Urban- era un eje central de las reivindicaciones territoriales mapuche de la comunidad Temucuicui y fue espacio de varios incidentes, incluido tomas y [heridos](#), que ocurrieron en reiteradas ocasiones. Recién en el 2014, ese predio junto con otros fundos de Urban, [fueron adquiridos](#) por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para ser finalmente destinados a las comunidades mapuche de aquella región.

La instalación de esa cámara en La Romana es, de muchas formas, representativa de la gran promesa detrás de las cámaras de televigilancia que tanto autoridades como policías usan para justificar su compra y uso en La Araucanía: *las cámaras de vigilancia servirán como medios de prueba irrefutable*. Como se reportaba en esta ocasión en particular, la cámara -que estaba instalada en una garita de Carabineros en un cerro de La Romana- tenía visor nocturno, grababa las 24 horas al día y rotaba en 360 grados, lo que permitía observar con detención todo lo que ocurría dentro del predio agrícola. Las imágenes eran almacenadas en un disco duro que era entregado al Ministerio Público cada tres días, para que analizara los incidentes que pudieran ocurrir en la zona. René Urban, en ese entonces, declaró que las imágenes debieran usarse en los juicios lo antes posible.

Pero al pasar de los años y a la luz de la evidencia, esta gran promesa ha terminado siendo desestimada. Como dijo casi proféticamente el columnista [Luis García Huidobro](#) a propósito de la instalación de esta cámara de seguridad en el ex fundo La Romana:

“Las cámaras, al igual que las escuchas telefónicas, bien lo saben los mapuche, pueden usarse para esclarecer la realidad o para oscurecerla; para contar una historia o para inventarla”.

### **Una flecha clave**

El 24 de julio del 2012 es una fecha clave para comprender la inversión enorme y sistemática que el Estado chileno ha hecho de tecnologías de vigilancia, como cámaras de seguridad y drones en La Araucanía. En esa fecha, el gobierno de Sebastián Piñera organiza una “cumbre de seguridad”, la que buscaba analizar una serie de eventos violentos ocurridos en la zona -que involucraban atentados incendiarios a predios particulares y crecientes demandas territoriales- y planificar medidas de acción y coordinación.

Entre las medidas que finalmente fueron adoptadas, estaba la implementación de un Plan Especial de Seguridad para La Araucanía, el que contemplaba [una serie de medidas](#) como fortalecer los grupos de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y una mayor coordinación con forestales y concesionarias de carreteras de la zona:

"Carabineros ha dispuesto el traslado y uso de tecnología de última generación, de vehículos debidamente habilitados y de equipamiento adecuado para enfrentar la violencia con plena

coordinación y más eficaces tácticas operativas. Se incrementará la capacidad de observación y detección a distancia, se intensificará el control vehicular en la zona y se pondrá particular énfasis en la recopilación de pruebas que acompañen las investigaciones de los fiscales”.

Tanto organizaciones mapuche, agrupaciones de la [sociedad civil](#) e incluso los medios de comunicación [denominaron](#) los resultados de esta cumbre como una “militarización” de la zona. El gobierno, no obstante, [descartó](#) cualquier tipo de militarización de la zona.

### **La promesa de las cámaras de seguridad**

Así, producto de esa “cumbre de seguridad”, el Estado chileno comenzó una seguidilla de anuncios sobre compra e instalación de cámaras de seguridad en la denominada zona roja de la Ruta 5 Sur (por el norte se inicia en Collipulli -viaducto del Malleco- y culmina a la altura de la comuna de Padre Las Casas por el sur), carretera principal de la zona y por donde los camiones de las forestales transitan.

De acuerdo con [reportes de prensa](#) de ese 2012, entre mayo del 2007 y febrero de 2010, el número de incidentes en el tramo entre Collipulli y Loncoche llegó a 45, con cuatro vehículos afectados y nueve camiones dañados por la acción del fuego. Desde marzo de 2010 a finales del 2012, en ese mismo tramo, se habían registrado 8 incidentes asociados a ataques violentos de desconocidos, con dos vehículos afectados y cinco camiones con distintos grados de destrucción por efecto de elementos incendiarios.

Por estos hechos, la Concesión Ruta La Araucanía S.A. ya había dispuesto de inversión para implementar televigilancia para las zonas de descanso ubicadas en Púa y Freire que, como reconoció el entonces Intendente de la zona, Andrés Molina, respondía a las necesidades planteadas en la “cumbre de seguridad” para lograr una mayor coordinación con Carabineros. Y así, el 11 de diciembre del 2012, el gobierno de turno [anunció](#) la ampliación de medidas de este tipo de seguridad en 17 puntos de Ruta La Araucanía. Se trataba de una millonaria inversión de \$1 mil 500 millones de pesos. Molina, en esa oportunidad, destacó que esta tecnología de última generación permitiría anticipar hechos de violencia y contar con los medios de prueba.

Pero, de acuerdo con la prensa, y a pesar de las cámaras, los ataques incendiarios a camiones no cesaron, y entre agosto y septiembre del 2013, el entonces ministro del interior Andrés Chadwick, [anunció primero](#) que se instalarían 48 cámaras de vigilancia en la Ruta 5 Sur, para luego [aumentar](#) a un total de 62 cámaras, instaladas en 19 puntos sensibles de la ruta, entre el sector del puente Malleco desde el norte, hasta la altura del aeropuerto de Temuco, al sur. El costo inicial del proyecto sería de 150 mil UF.

Según [reporta La Tercera](#), “las cámaras graban en alta definición, cuentan con elementos que permiten detectar, a través del calor, sectores o personas en actitud sospechosa. A través de fibra óptica, las cámaras envían de manera permanente imágenes al Centro de Control de Tránsito de Temuco donde se encuentra Carabineros. Una vez recibida la imagen, esta se transmite al patrullaje y cuartel más cercano”. Asimismo, Chadwick señaló que estas cámaras permitirán tres objetivos:

“Prevenir, actuar a tiempo por parte de las policías y disponer de las pruebas, a efecto de que los tribunales esta vez sí, no existan excusas para sancionar a quienes cometen actos violentos, extremistas o terroristas aquí en la zona”.

## Las polémicas con las cámaras

Pero el flamante aviso de cámaras de televigilancia pronto comenzó a ser opacado con una serie de irregularidades.

El 22 de noviembre del 2013, el entonces diputado por el distrito 49 de La Araucanía, Fuad Chahin Valenzuela, [anunció](#) que oficiaría al Ministerio del Interior, debido al atraso en la instalación de las cámaras de seguridad anunciadas por Chadwick, las que, según la autoridad, aún estaban en proceso de licitación “a pesar de que se publicitaron a todo el país mintiendo sobre los plazos y con montaje incluido”. En este sentido, el diputado ahondó:

“Cuando el Gobierno anunció esta obra se mostró una cámara de seguridad ya instalada de la que se destacó su tecnología y utilidad para evitar ataques incendiarios y de otra índole que estaban sucediendo en la Ruta 5 Sur. Pues bien, si transitamos por el lugar donde estaba dicha cámara, hoy sólo está el bloque de cemento sin dicho instrumento, pues sólo fue parte del montaje para la prensa y nada más”.

Ya con el nuevo gobierno de Michelle Bachelet en el poder, el 16 de mayo del 2014 se denunciaron serios problemas de inoperancia en ese sistema de vigilancia, luego que se comprobara que nadie estaba detrás de las cámaras ubicadas en el sector. Así lo [informó](#) El Mercurio, tras constatar que ni la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) de Temuco, ni carabineros ni el Ministerio del Interior contaban con personal monitoreando los 19 puntos de televigilancia dispuestos en la zona. Para el mismo medio, los problemas en la implementación de este sistema de vigilancia existieron desde el comienzo por la falta de fibra óptica para conectarlas y retrasos administrativos demoraron el proyecto.

El 7 de octubre del 2014, al ser consultado por el estado de las cámaras de seguridad dispuestas en 17 puntos en la Ruta 5 Sur, el subsecretario de entonces, Mahmud Aleuy, [enfaticó](#) que esa iniciativa era una herencia del gobierno anterior y que la actual administración debió modificarla, pues no cumplía con el objetivo de advertir hechos delictuales y actuar con rapidez. Indicó que fue el gobierno de Bachelet el que debió instalar fibra óptica desde las cámaras para que pudieran ser observadas desde dependencias de la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO). Además, debió contratar a 12 funcionarios para supervigilar los dispositivos las 24 horas pues, en la administración Piñera, las cámaras no eran observadas en horario nocturno:

“Hoy hay solo 17 puntos con cámaras funcionando. Esas cámaras hasta el 11 de marzo no estaban conectadas a nada. El 30 de agosto de este año se conectaron a la Central de Comunicaciones de Carabineros en Temuco. En total son 19 cámaras más siete dispositivos termales”.

Asimismo, Aleuy anunció en esa oportunidad que se instalarían otras 24 cámaras de seguridad en la carretera, en zonas definidas estratégicamente por Carabineros para completar la cantidad de territorio que hasta ahora no está cubierto por los 26 dispositivos (19 cámaras y 7 equipos termales) en la Ruta 5 Sur.

Los reproches al gobierno anterior continuaron el 2015, cuando ese 10 de septiembre se [anunciaron](#) nuevas cámaras de televigilancia se implementarían en la Ruta 5 Sur para reforzar el control en la provincia de Malleco y evitar hechos de violencia en la denominada "Zona Roja". En total, serían 26 dispositivos, ubicados entre las ciudades de Victoria y Collipulli, en reemplazo de varios dispositivos instalados en el gobierno de Sebastián

Piñera, pero que no estaban operativos. El entonces intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, afirmó:

"Hay cámaras de seguridad, usted sabe, que se instalaron en el Gobierno pasado pero también saben, no es novedad, que esas cámaras no estaban conectadas a ningún sistema, entonces eran un lindo adorno".

En junio del 2016 la promesa de Jouannet aún no era real. Y ante recientes quemaduras de camiones en el tramo vigilado por cámaras de vigilancia de Collipulli y Temuco, el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, [volvió a comprometer](#) la instalación de 26 cámaras en la ruta 5 sur, entre Collipulli y Temuco, que se sumarían a las 19 instaladas en el sector (herencia de gobierno de Piñera) y que, por lo demás, [se reemplazarían](#) por otros dispositivos con tecnología full HD. Todo significaría una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

### **La evidencia: las cámaras no sirven**

Pero en el 2016 tanto la opinión pública como los directos interesados ya no compran tan fácilmente la eterna promesa sobre las cámaras de vigilancia como ayuda a la prevención del delito ni menos como medio de prueba.

De hecho, el mismo día del último anuncio de Aleuy sobre la instalación de nuevas cámaras, tanto transportistas y representantes de gremios productivos de la zona sur expresaron sus críticas. El más vocal ha sido José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, quien en esa primera ocasión [afirmó](#): "Si las cámaras estuvieran funcionando, sería una solución, pero jamás han funcionado, siempre tienen problemas".

A pesar de todo, Aleuy defendió el sistema y dio una inesperada explicación. La autoridad [dijo](#) "(una cámara) estaba a tres kilómetros de distancia del atentado y la otra, a un kilómetro. Pero había mucha neblina en el sector", lo que habría provocado dificultades en su visibilidad.

El malestar llegaba a tal punto, que El Mercurio sacó [una nota](#) sobre las deficiencias del proyecto de monitoreo en la carretera. En el reportaje, el entonces jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Novena Región, Luis Arroyo ([que años después estaría envuelto en la polémica Operación Huracán](#)), afirmó que "acudimos a ellas con mucha frecuencia, tanto a esas cámaras como a las que puedan tener instaladas empresas privadas en lugares cercanos". No obstante, también indicó que las cámaras de la Ruta 5 sur no cumplen a cabalidad con el objetivo propuesto por los sucesivos Ministerios del Interior de terminar con los ataques a camiones y que el registro de los hechos se use como medio de prueba. El fiscal declaró:

"Lamentablemente, en más de un 90% de los casos no han sido imágenes útiles las que han captado. La resolución es muy mala".

Asimismo, el fiscal agregó que, como la mayoría de los ataques ocurre de noche, "se registran en momentos en que hay oscuridad en la carretera, lo que dificulta aún más la obtención de imágenes". Aseguró también que no hay un registro de en cuántos juicios se ha utilizado una imagen como prueba, pero aclaró que no se trata de una cifra significativa, pues "se utiliza una toma en conjunción con otros elementos". Por ejemplo, recién en el 2019 se [dictaría](#) una primera condena por incendios (no a camiones sino a previos) donde el registro de la cámara habría servido como medio de prueba.

José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, vuelve a arremeter en aquel reportaje: "Las cámaras están encendidas, pero se ve todo borroso. El subsecretario nos sigue mintiendo. Dijo que estaban funcionando los 19 puntos y que ahora venían 42 y tantas cámaras más. Esas son solo informaciones para la prensa; para nosotros, ninguna".

Y en una comparación un tanto perturbadora en el contexto de acusaciones de militarización de La Araucanía, remató diciendo: "En las cámaras tenemos algo así como una ametralladora real, pero con balas de fogeo".

### **Oídos bien sordos**

¿Cómo se aplacan las críticas a los resultados fallidos de las tecnologías de vigilancia? ¡Pues con más tecnología de vigilancia! A casi un año de las críticas a las cámaras de seguridad de la Ruta 5 Sur, en mayo del 2017, y en los descuentos del segundo mandato de Michelle Bachelet, [se inauguraron](#) 71 cámaras de seguridad que, desde abril, se habían instalado en 140 kilómetros de la Ruta 5 Sur de la Región de la Araucanía y que significó una inversión de 4 mil millones de pesos. De las 71 cámaras de monitoreo instaladas, 24 son térmicas. Todas operadas por Carabineros, según detalló el general Franzani, el entonces Jefe de la Novena Zona Araucanía:

“Operativamente estas cámaras van a estar con una señal directa a nuestra Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), que serán operadas por 12 funcionarios nuestros a todo turno las 24 horas, lo que nos va a permitir que, por medio del operador de Cenco, entregar en forma inmediata y oportuna en el más mínimo tiempo de respuesta, para que el personal de Carabineros tome el procedimiento y a las personas que están cometiendo el ilícito en la carretera”.

Según el subsecretario Aleuy, al contar con esta tecnología en las rutas principales, los recursos humanos “que se requerían para mantener control en la Ruta 5, los podemos desplazar a otros sectores que, como ustedes saben, es necesario hacerlo”.

Pero el presidente de la Federación de Camioneros del Sur siguió incrédulo ante los anuncios del gobierno. [Sostuvo](#) que el [ataque a la empresa Cavalieri](#), donde se incendiaron 17 camiones a un costado de la Ruta 5 Sur, demuestra la ineficacia del sistema de cámaras: “En Pillanlelbún las cámaras tomaron a cinco personas y resulta que no hay ninguno detenido”.

No obstante, a menos de un mes de su inauguración, el flamante nuevo sistema de videovigilancia quedó de nuevo en entredicho debido a [nuevos ataques](#) incendiarios en la Ruta 5 Sur. Las críticas, obviamente, no tardaron en multiplicarse.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación nacional de Transporte de Carga, [cuestionó](#) la eficacia que poseen las cámaras de televigilancia. El entonces intendente Miguel Hernández [aseguró](#) que las cámaras funcionan, aunque reconoció que son vulnerables (por ejemplo, mucha oscuridad producto de una densa neblina) y que existen puntos ciegos en la Ruta 5 Sur.

La explicación resulta curiosa cuando se constata que la neblina no es una situación de excepción en esa zona. El diputado DC, Fuad Chahín, salió al paso de las críticas en contra la gestión de Hernández y [precisó](#) que a veces existe una mala asesoría del gobierno central por gente que no conoce la región. En respuesta al intendente, Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía, [dijo](#):

“Que nos digan ahora que las cámaras son vulnerables nos parece complicado. Hace dos semanas nos estaban diciendo que nos traían cámaras de última generación para asegurar la seguridad en las vías y vemos que eso no está ocurriendo. Es más, vemos una bajísima efectividad policial en este último caso”.

### **El futuro no se rinde**

Pero la promesa de las tecnologías de vigilancia, cuando hay pocas ideas para resolver problemas de política pública, nunca falla. No importa el historial de fracasos, la evidencia puede siempre barrerse bajo la alfombra.

Así es como el 9 de agosto del 2018, se inició en Temuco un proyecto que considera un aumento de 66 cámaras con reconocimiento facial, con una inversión cercana de \$831.500.000, financiado con fondos municipales. El contrato es con la empresa Telefónica del Sur, que está a cargo de la operación, transmisión de datos y mantención de equipos por un periodo de funcionamiento de cinco años. El alcalde de Temuco, Miguel Becker, que ha tenido más de algún [incidente](#) con la población mapuche de la ciudad, [afirmó](#):

“Somos la primera ciudad del sur de Chile con cámaras de reconocimiento facial para identificar a aquellas personas que cometan delitos o tienen orden de detención pendiente. Estas cámaras tendrán visualización, administración y operación de las imágenes en la Central del Comunicaciones (Cenco) de Carabineros y en las oficinas de la Dirección de Seguridad Ciudadana, ambos lugares con igual nivel de operatividad y funcionamiento. Esta nueva tecnología nos ayudará a mejorar los índices de delincuencia, porque sabemos que la gente quiere vivir tranquila y, en ese sentido, estos sistemas nos colaborarán fuertemente en la función de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile”.

Excelentes promesas salvo por unos detalles. El primero, que es un sistema ilegal en Chile. Como ONG Derechos Digitales ha constantemente [denunciado](#), no existe una habilitación legal expresa que autorice el reconocimiento de personas con fines de vigilancia.

El segundo detalle es que el reconocimiento facial no funciona. Así, como suena. Evidencia fresca hay de sobra. Por ejemplo, en mayo del 2019, [se supo que](#), en Londres, Inglaterra, el uso de tecnologías de reconocimiento facial durante el 2016 y 2018 arrojó un 96% de error para identificar potenciales criminales. Es decir, una abrumadora mayoría de las veces el software alertó erróneamente a la policía que una persona que pasa por el área de escaneo coincide con una foto en la base de datos.

Y en Chile, sin ir más lejos, la cifra de error es aún más escalofriante. Todo se inició en noviembre del 2018, cuando se [anunció](#) con bombos y platillos que el centro comercial Mall Plaza los Domínicos en conjunto con la Municipalidad de Las Condes y las policías (Carabineros y Policía de Investigaciones), trabajarían con un sistema de cámaras con reconocimiento facial. En la ocasión, el alcalde Joaquín Lavín anunció que las cámaras podrán detectar la presencia de personas con órdenes de detención en el sector tras ser comparados estos datos con los que tienen las policías. No obstante, ya en marzo del 2019 nos enteramos de que el sistema era un fracaso.

Luego de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) oficiara a la PDI, esta última respondió detallando la realización de pruebas entre mayo y junio de 2018 que permitieron [establecer](#) que:

“El 90% de las identificaciones de rostros realizadas por el sistema fueron falsos positivos (identificación de persona errónea) y el otro 10% se refiere a personas precargadas en la base de datos, que si fueron reconocidas, pero estas personas corresponden a funcionarios del mall con la finalidad de evaluar el software”.

Pero, además, los sistemas de reconocimiento facial son altamente discriminatorios por clase social y color de piel y, escudado en el discurso de objetividad tecnológica, “facilita abusos de la autoridad”. Por ejemplo, Joy Buolamwini, creadora de Algorithmic Justice League e investigadora del MIT, [comprobó](#) que la precisión de sistemas de inteligencia artificial (IA) de IBM, Microsoft y Face++, variaba mucho en función del género y el color de la piel. Al determinar el sexo, las tasas de error de estos sistemas eran inferiores al 1% para los hombres de piel más clara, pero para las mujeres de rostro más oscuro, las tasas error llegaban al 35%.

La situación no hace menos que alertar cuando revisamos toda la evidencia de este reporte y comprobamos que Temuco es la capital de La Araucanía, región que tiene los mayores índices de pobreza a nivel nacional (23,6%, en comparación con el promedio nacional 11,4%), y la mayor concentración de población indígena (más del 30% de la población, versus un 8% a nivel nacional).

Sumando la evidencia sobre la ineficacia y aspectos discriminatorios del reconocimiento facial, además de las históricas deficiencias de las cámaras de televigilancia para los propósitos prometidos en La Araucanía, ¿por qué el Estado chileno sigue gastando miles de millones de pesos en tecnologías de vigilancia que no son eficaces? Si como sociedad preferimos omitir esta evidencia y seguimos usando recursos públicos en televigilancia, ¿qué estamos persiguiendo entonces?

.....